

CONTENIDO

	Pág N°
PODER LEGISLATIVO	
Leyes.....	2
Proyectos.....	3
Acuerdos.....	5
PODER EJECUTIVO	
Decretos.....	5
Acuerdos.....	7
DOCUMENTOS VARIOS	7
PODER JUDICIAL	
Avisos.....	27
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES	
Edictos.....	27
Avisos.....	27
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	28
REGLAMENTOS	35
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	47
REGÍMEN MUNICIPAL	49
AVISOS	49
NOTIFICACIONES	64
FE DE ERRATAS	83

PODER LEGISLATIVO

LEYES

N° 8503

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

APERTURA DE LA CASACIÓN PENAL

Artículo 1°—Modificanse los artículos 15, 410, 411, 414, 447 y 449 del Código Procesal Penal. Los textos dirán:

“Artículo 15.—**Saneamiento de defectos formales.** El tribunal o el fiscal que constate un defecto saneable en cualquier gestión, recurso o instancia de constitución de los sujetos del proceso, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será superior a cinco días. Si no se corrige en el plazo conferido, resolverá lo correspondiente.”

“Artículo 410.—**Formalidades de interposición.** La revisión será interpuesta, por escrito, ante el Tribunal de Casación Penal correspondiente. Contendrá, la referencia concreta de los motivos en que se basa y las disposiciones legales aplicables. Se adjuntará, además, la prueba documental que se invoca, y se indicará, en su caso, el lugar o archivo donde ella está. Asimismo, deberán ofrecerse los elementos de prueba que acrediten la causal de revisión invocada.

En el escrito inicial, deberá nombrarse a un abogado defensor. De no hacerlo, el tribunal lo prevendrá, sin perjuicio de nombrar a un defensor público, en caso de ser necesario.

Artículo 411.—**Admisibilidad.** Cuando la demanda haya sido presentada fuera de las hipótesis que la autorizan, o resulte manifiestamente infundada, el tribunal, de oficio, declarará su inadmisibilidad.

El tribunal sustanciará la acción y se pronunciará sobre el fondo, aun cuando estime que en su redacción existen defectos. Si considera que estos le impiden, en forma absoluta, conocer del reclamo, le prevendrá a la parte su corrección, conforme al artículo 15 de este Código, puntualizándole los aspectos que deben ser aclarados y corregidos. Si los defectos no se corrigen, resolverá lo que corresponda.

No será admisible plantear, por la vía de la revisión, asuntos que ya fueron discutidos y resueltos en casación, salvo que se fundamenten en nuevas razones o nuevos elementos de prueba.”

“Artículo 414.—**Recepción de la prueba.** El tribunal admitirá la prueba que estime útil para la resolución definitiva y comisionará a uno de sus integrantes para que la reciba. Para la recepción, se fijarán la hora y la fecha, y la diligencia se celebrará con la participación de los intervinientes que se presenten.

Si el juez comisionado lo estima necesario, ordenará la recepción de prueba para mejor resolver.

Cuando se haya recibido prueba oral, quien la haya recibido deberá integrar el tribunal en el momento de la decisión final.”

“Artículo 447.—**Trámite.** El Tribunal de Casación podrá declarar inadmisibles el recurso, si estima que la resolución no es recurrible, que el recurso ha sido interpuesto en forma extemporánea o que la parte no tiene el derecho de recurrir, en cuyo caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen.

Si el recurso es admisible, el Tribunal lo sustanciará y se pronunciará sobre el fondo, aun cuando estime que en su redacción existen defectos. Si considera que estos le impiden, en forma absoluta, conocer del reclamo, le prevendrá a la parte su corrección, conforme al artículo 15 de este Código, puntualizándole los aspectos que deben aclararse y corregirse. Si los defectos no son corregidos, resolverá lo que corresponda.

Si el recurso es admisible y no debe convocarse a una audiencia oral, ni se debe ordenar la recepción de pruebas, el Tribunal dictará sentencia. En caso contrario, esta deberá dictarse después de la audiencia y una vez recibida la prueba.”

“Artículo 449.—**Prueba en casación.** Las partes podrán ofrecer la prueba, cuando el recurso se fundamente en un defecto de procedimiento y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta o los registros del debate, o bien, en la sentencia.

También es admisible la prueba propuesta por el imputado o en su favor, incluso la relacionada con la determinación de los hechos que se discuten, cuando sea indispensable para sustentar el reclamo que se formula y en los casos en que se autoriza en el procedimiento de revisión.

El Ministerio Público, el querellante y el actor civil podrán ofrecer prueba esencial para resolver el fondo del reclamo, solo cuando antes haya sido rechazada, no haya sido conocida con anterioridad o esté relacionada con hechos nuevos.

El Tribunal de Casación rechazará la prueba oral que sea manifiestamente improcedente o innecesaria; pero, si la estima indispensable, podrá ordenarla incluso de oficio.

Cuando se haya recibido prueba oral, los que la hayan recibido deberán integrar el Tribunal en el momento de la decisión final.”

Artículo 2°—Adiciónase al artículo 369 del Código Procesal Penal, el inciso j), cuyo texto dirá:

“Artículo 369.—**Vicios de la sentencia.** Los defectos de la sentencia que justifican la casación serán:

[...]

j. Cuando la sentencia no haya sido dictada mediante el debido proceso o con oportunidad de defensa.”

Artículo 3°—Adiciónanse al Código Procesal Penal los artículos bis y 451 bis. Los textos dirán:

“Artículo 449 bis.—**Examen del Tribunal de Casación.** El Tribunal de Casación apreciará la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, examinando las actuaciones y los registros de la audiencia, de modo que pueda valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión. De no tener registros suficientes para realizar esa apreciación, podrá reproducir en casación la prueba oral del juicio que, en su criterio, sea necesaria para examinar la procedencia del reclamo, y la valorará en relación con el resto de las actuaciones.

De igual manera, podrá valorar en forma directa la prueba que se haya introducido por escrito al juicio.”

“Artículo 451 bis.—**Juicio de reenvío.** El juicio de reenvío deberá ser celebrado por el mismo tribunal que dictó la sentencia, pero integrado por jueces distintos.

El Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán formular recurso de casación contra la sentencia que se produzca en el juicio de reenvío que reitere la absolución del imputado dispuesta en el primer juicio, pero sí podrán hacerlo en lo relativo a la acción civil, la restitución y las costas.

El recurso de casación que se interponga contra la sentencia del juicio de reenvío, deberá ser conocido por el Tribunal de Casación respectivo, integrado por jueces distintos de los que se pronunciaron en la ocasión anterior. De no ser posible integrarlo con nuevos jueces porque el impedimento cubre a titulares y suplentes, o no se cuenta con el número suficiente de suplentes, la competencia será asumida por los titulares que sean necesarios, no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto de ellos.”

Artículo 4°—Modificanse el artículo 62 y su transitorio, así como el artículo 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los textos dirán:

“Artículo 62.—La Corte Suprema de Justicia tendrá, al menos, cuarenta y cuatro magistrados suplentes, de los cuales diez estarán asignados a cada una de las Salas de Casación y catorce a la Sala Constitucional. Serán nombrados por la Asamblea Legislativa, durarán en sus funciones cuatro años, prestarán juramento ante la misma Asamblea, y deberán reunir los requisitos exigidos a los titulares, excepto el de rendir garantía.

Para la elección de los magistrados suplentes, cada una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia convocará a un concurso público de antecedentes, con el fin de escoger a dos candidatos por cada plaza vacante. La nómina será sometida al conocimiento de la Corte Plena y, de ser aprobada, se enviará a la Asamblea, la cual realizará la designación correspondiente entre los nominados.

Transitorio.—Todos los actuales magistrados suplentes continuarán desempeñando su cargo hasta completar su período. Los nuevos magistrados suplentes serán elegidos por el resto del período.”

“Artículo 93.—El Tribunal de Casación Penal conocerá:

- 1) Del recurso de casación y el procedimiento de revisión, en asuntos de conocimiento del tribunal de juicio integrado por un juez.
- 2) Del recurso de casación y el procedimiento de revisión, en los delitos contra la libertad sexual y los referidos a estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas. Si en el mismo proceso se atribuyen otros delitos, además de los antes mencionados, su conocimiento corresponderá al órgano de casación competente para conocer del delito de mayor gravedad.

- 3) En apelación, de las resoluciones que dicten los jueces del tribunal de juicio, cuando la ley acuerde la procedencia del recurso.
- 4) De las apelaciones en asuntos de migración y extranjería que la ley establezca.
- 5) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones de sus integrantes propietarios y suplentes.
- 6) De los conflictos de competencia que no deban ser resueltos por los tribunales de juicio.
- 7) De los conflictos suscitados entre juzgados contravencionales y tribunales de juicio.
- 8) De los demás asuntos que se determinen por ley.”

Artículo 5°—Adiciónase a la Ley Orgánica del Poder Judicial el artículo 93 bis, cuyo texto dirá:

“Artículo 93 bis.—**Integración del Tribunal de Casación Penal.** El Tribunal de Casación Penal estará conformado con secciones independientes, integradas cada una por tres jueces, de acuerdo con las necesidades del servicio, y se distribuirán su labor conforme lo disponga el Consejo Superior.”

Artículo 6°—Disposiciones transitorias:

Transitorio I.—Las personas condenadas por un hecho delictivo con fecha anterior a esta Ley, a quienes se les haya obstaculizado formular recurso de casación contra la sentencia, en razón de las reglas que regulaban su admisibilidad en aquella fecha, podrán plantear la revisión de la sentencia ante el tribunal competente, invocando, en cada caso, el agravio y los aspectos de hecho y de derecho que no fueron posibles de conocer en casación.

Transitorio II.—La reforma del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuesta en el artículo 4 de la presente Ley, entrará en vigencia a partir del momento en que se aseguren los recursos económicos suficientes para hacer frente a la nueva carga laboral del Tribunal de Casación, tanto en personal (jueces y asistentes) como en lo referente a instalaciones e implementos materiales. Cumplidas las condiciones anteriores, el Tribunal de Casación Penal asumirá el conocimiento de los nuevos casos en los que, a partir de la fecha que determine expresamente la Corte Suprema de Justicia, dicten sentencia los tribunales penales correspondientes.

Rige a partir de su publicación.

Comunicase al Poder Ejecutivo

Asamblea Legislativa.—San José, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil seis.—Gerardo González Esquivel, Presidente.—Daisy Serrano Vargas, Primera Secretaria.—Luis Paulino Rodríguez Mena, Segundo Secretario.

Ejécute y publíquese

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil seis.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de Justicia y Gracia, Patricia Vega Herrera.—1 vez.—(Solicitud N° 38860 M. Justicia).—C-118270.—(L8503-49159).

PROYECTOS

N° 16.068

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA AL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

Asamblea Legislativa:

El Movimiento Familiar Cristiano de Costa Rica es una entidad sin fines de lucro, inscrita en el Registro Nacional, y miembro de la Confederación Internacional de Movimientos Familiares Cristianos.

Esta confederación es un órgano consultivo de la ONU y reconocida por el Vaticano como una asociación de fieles laicos de derecho privado.

Desde 1958, el Movimiento Familiar Cristiano de Costa Rica ha desarrollado una labor constante de fortalecimiento de los valores humanos y cristianos desde y para la familia costarricense. Ha llevado a cabo su actividad, en forma organizada y activa en bien de la familia costarricense, mediante charlas, talleres, consejería matrimonial y familiar, encuentros conyugales, y formación para grupos de matrimonios y jóvenes, consolidando una posición clara, definida y consistente dentro de la sociedad costarricense.

Todos somos conscientes de la crisis de valores que afecta nuestra sociedad, la cual lamentablemente se origina en los hogares, cuya unión no es sólida y afecta a los hijos y ha traído una grave descomposición social; motivo por el cual la labor de grupos organizados como el Movimiento Familiar Cristiano de Costa Rica es encomiable y debe ser fortalecida con el fin de que el alcance de su apoyo a la familia sea difundido con mayor amplitud y contribuya a la solución de la problemática general. Con ese objetivo, someto a la aprobación de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley, que como ya señalé, se origina en las necesidades de fortalecer a las organizaciones que benefician a la sociedad:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA AL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

Artículo 1°—Declárase de utilidad pública el Movimiento Familiar Cristiano de Costa Rica, el cual una labor constante de fortalecimiento de los valores humanos y cristianos desde y para la familia costarricense. Se

le faculta para recibir donaciones deducibles del impuesto de renta, así como todo tipo de apoyo por parte de las instituciones del Estado y de organizaciones privadas, nacionales e internacionales.

Artículo 2°—Rige a partir de su publicación.

Juan José Vargas Fallas, Diputado.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

San José, 22 de noviembre del 2005.—1 vez.—C-19270.—(49163).

N° 16.081

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Asamblea Legislativa:

Vivimos un mundo cada vez más interconectado por la globalización y por la revolución científico-tecnológica. Aunque por momentos parece embargarnos un sentimiento de añoranza ante la constatación de que nuestras sociedades no serán nunca más lo que fueron, el futuro resulta más que promisorio para aquellas naciones dispuestas a aprovechar inteligentemente las potencialidades que ofrece el mundo contemporáneo.

Para un país como Costa Rica, sin grandes extensiones territoriales y pobre en yacimientos minerales, pero que tempranamente entendió la importancia de invertir en el más importante de los recursos: el conocimiento, las puertas del desarrollo nos invitan a entrar a él. Como bien lo ha señalado Juan Enríquez Cabot, “*el futuro pertenece a las pequeñas poblaciones que hacen de la mente un imperio*”.

En la actualidad dos tercios de la economía global se basa en el conocimiento, y es precisamente el conocimiento tecnológico uno de los principales factores que explica la diferencia entre países pobres y países ricos. Por esto, lejos de darle la espalda a la tecnología, debemos abrirla con determinación y entusiasmo.

Sin embargo, pese a avances notorios experimentados por nuestro país en el pasado en el campo del conocimiento; la ciencia y la tecnología se encuentran hoy en un lugar poco privilegiado dentro de la agenda gubernamental. Tal y como le he afirmado en otras ocasiones, la agenda tecnológica tiende a ser una agenda cautiva; confinada o bien a círculos eminentemente tecnológicos, o bien sujeta a los intereses estrictamente comerciales.

En un esfuerzo por abrir espacios de análisis y discusión sobre la agenda tecnológica nacional, he procurado impulsar algunas iniciativas de investigación y promulgación de leyes dentro de la corriente legislativa, dentro de las que se encuentran algunas ligadas a temas como la adquisición de tecnología en el sector público costarricense, la neutralidad tecnológica, el fomento del sector de empresas desarrolladoras de software, el comercio electrónico, etc. Dentro de estas, una de las más relevantes y que pudimos finalmente llevar a buen puerto es la “Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos”.

El desarrollo tecnológico ha revolucionado la forma en la que la sociedad produce, guarda y utiliza la información y ha transformado las prácticas tradicionales de intercambio comercial al permitir la interconexión directa de los sistemas críticos del comercio y sus componentes claves: clientes, proveedores, distribuidores y empleados.

El comercio electrónico mundial es responsable de los profundos cambios registrados en la manera de hacer negocios estimulando la rápida integración de los mercados globales. En la medida en que crece el comercio electrónico mundial, las empresas buscan una estructura adecuada y estable que respalde las transacciones del comercio electrónico, y que sea avalada y reconocida por los gobiernos.

Las instituciones y sistemas reguladores del Estado deben garantizar la confianza, protección y seguridad jurídica de las partes involucradas en las transacciones económicas electrónicas. Ante ello la autenticación y seguridad de documentos y mensajes digitales son fundamentales para garantizar a los agentes económicos que sus transacciones tendrán reconocimiento legal y que en caso de que se tengan que dirimir conflictos, se puedan asignar responsabilidades y reparar daños según fuese el caso. En este contexto la introducción de la firma digital en nuestro ordenamiento jurídico por medio de la Ley N° 8554, ha sido el primer paso importante en la dirección apuntada.

Creemos necesario seguir andando en la misma dirección, de ahí que presentemos a consideración de las señoras y señores diputados la presente iniciativa tendiente a regular el comercio electrónico.

Este proyecto tiene su principal antecedente en Ley española de “*Servicios de la sociedad de la Información y de Comercio Electrónico*” (34/2002, 11 de julio), no obstante, creemos, que con una visión más acorde y armónica con la realidad de la red internacional, principalmente en lo relativo a su flexibilidad, dinamismo y amplísimo ámbito de libertad individual; desde esta perspectiva la primera diferencia importante (más bien de naturaleza fundamental) con la normativa española, radica en la renuncia al sistema tradicional de registro de proveedores de servicios, práctica que consideramos como heredada de esquemas de pensamiento tradicionales del derecho mercantil donde se parte y se pretende implementar regulaciones estrechamente vinculadas a ubicaciones espacio/temporales completamente definidas.

Hoy día debemos contar con que un proveedor de servicios no se ubica en un determinado país o región, sino que eventualmente se halla disgregado a lo largo y ancho del planeta, asimismo que en la prestación final de un servicio puede haber una larga cadena de valor agregado por otros subproveedores igualmente diseminados por toda la Internet, con lo que no solo se hace materialmente imposible requerir el registro local de prestación de servicios, sino que también superfluo e ingenuo.